

significativa a la historiografía del catalanismo, al situar su origen en el seno de las tensiones internas de la Iglesia catalana y en el contexto político de la Restauración. Su conclusión —que el catalanismo político no habría prosperado sin el previo catalanismo eclesial, y que este, a

su vez, fue producto de una maniobra del Estado liberal— abre nuevas perspectivas de análisis sobre la relación entre religión, política y construcción nacional en la España contemporánea.

DAVID DELGADO RAMOS

RUIZ, Julius, **La Guerra Sucia: La República contra la quinta columna**, Barcelona: Espasa, 2024, 912 p., ISBN: 9788467074710.

En la narrativa popular sobre la guerra civil española, reflejada en *El holocausto español* de Paul Preston, se suele destacar la represión del bando nacional y se presenta a la República como un régimen representativo y justo. Sin embargo, historiadores como Stanley G. Payne han subrayado que también existió una violencia sistemática del lado republicano. En *La guerra sucia* (Espasa, 2024), Julius Ruiz documenta cómo el Frente Popular articuló una red de inteligencia para perseguir a sus opositores y consolidar una visión de inspiración estalinista.

Ruiz no minimiza los crímenes del bando nacional; describe el bombardeo de Guernica del 26 de abril de 1937 como una auténtica “aniquilación” de la ciudad vasca. Tampoco niega la existencia de redes franquistas en Madrid y Barcelona, y reconoce que algunas acciones contra la quinta columna fueron efectivas y justificadas. Analiza casos como la red falangista Fernández Golfín-Corujo, infiltrada en el Palacio de Justicia, y la organización España Una, desar-

ticulada gracias al trabajo del agente comunista Tomás Durán González, miembro de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia.

El libro se apoya en una amplia gama de fuentes primarias: testimonios ante tribunales franquistas, artículos de prensa, comunicados del Frente Popular, papeles de Indalecio Prieto y memorias de oficiales republicanos. A partir de este material, Ruiz reconstruye el funcionamiento del aparato de inteligencia del bando republicano y sostiene que el objetivo del régimen no era solamente la neutralización del fascismo, sino también eliminar a los disidentes políticos, incluso antes del alzamiento militar de julio de 1936.

Ruiz no solo documenta la destrucción de más de 20.000 iglesias y decenas de miles de católicos durante la Segunda República, sino que sostiene que el Frente Popular usó la retórica antifascista para justificar la represión brutal. Las matanzas de la Cárcel Modelo y Paracuellos fueron parte de un proyecto autocrático, no reacciones al avance nacional. Ruiz

muestra que, sobre las matanzas de Paracuellos, aunque algunos como Giral intentaron detenerlas, otros como Galarza, García Oliver y Largo Caballero las avalaron y solo la presión internacional llevó a un paro. No fueron excesos aislados, sino la política del Estado.

Ruíz emplea *El Socialista* para mostrar cómo el Frente Popular amplió el concepto de “fascista” hasta incluir a católicos, campesinos derechistas y cualquier opositor al socialismo. El 26 y 27 de julio de 1936, milicianos fusilaron a veintiún supuestos derechistas por no entregar sus armas, aunque Ruíz sugiere que habrían sido ejecutados de todos modos. El gobierno no distinguía entre conspiradores reales y civiles comunes, ni frenó la infiltración nazi en la Falange.

Ruíz analiza la progresiva politización del DEDIDE tras la victoria del Frente Popular en 1936. De los agentes estudiados, casi todos rechazaban la democracia liberal; muchos se alineaban con visiones marxistas, y trece apenas defendían una democracia obrera. El 63 % pertenecía a la UGT y el 23 % al PSOE. Varios habían participado en las insurrecciones de 1934. Figuras como Guillermo Torrón e Hilario Nieto defendían el socialismo como una manera para llegar al “bienestar económico-social” y criticaban la economía burguesa. Aunque reconoce la heterogeneidad de la izquierda republicana, Ruíz concluye que el DEDIDE evolucionó hacia posiciones negrinistas y comunistas y algunos agentes participaron en el alzamiento homicida de 1934.

Ruíz destaca que el DEDIDE se radicalizó tras su creación en agosto de 1936 bajo Francisco Ordóñez Peña, detenido un mes antes de la insurrección asturiana. En Cataluña, la agencia priorizó el antifascismo sobre la experiencia: de 268 agentes, solo 24 habían sido policías, muchos con antecedentes disciplinarios. Diez apoyaron la rebelión separatista de 1934. Agentes como José Jiménez-Parajero defendían el marxismo y el triunfo del proletariado, mientras Juan Almela Somer, el nietastro de Pablo Iglesias Posse, reivindicaba la “fe socialista” inculcada por su familia. El ingreso al DEDIDE requería lealtad ideológica en sus entrevistas. Para Ruíz, la policía se convirtió en un instrumento del socialismo autoritario, no del pueblo.

Ruíz expone que el sistema de seguridad del Frente Popular también persiguió a disidentes de izquierda contrarios a la estalinización, especialmente el POUM. Andrés Nin fue torturado y asesinado con respaldo soviético, y el gobierno de Negrín encubrió el crimen. A través de fuentes como *Mundo Obrero*, Ruíz demuestra cómo se fabricó un falso vínculo entre trotskistas y fascistas, legitimando purgas internas. En pleno auge de las purgas en Moscú, el Frente Popular facilitó la expansión del terror estalinista en España. Un memorándum del CEIC de mayo de 1937 acusó sin pruebas a los trotskistas de colaborar con el bando sublevado. Según Ruíz, esta complicidad borró la pluralidad de la izquierda española.

Ruíz describe la depuración del Cuerpo de Investigación y Vigilancia

(CIV) como una “limpieza política” impulsada tras la victoria del Frente Popular. Desde febrero de 1936, se expulsó a conservadores y moderados, y se incorporó a militantes del PSOE y la UGT: en Madrid, de 1.143 nuevos nombramientos, el 48 % procedía de ambos grupos. Esta politización no fue casual. Ya en 1921, Prieto había definido el socialismo como “la perfectibilidad liberal,” y en 1937 la Comisión Ejecutiva animó directamente una “limpieza de la retaguardia.” Ruíz desmonta la idea de que la violencia republicana fue producto del caos: la actuación del CIV y figuras como Agapito García Atadell demuestran que el Estado facilitó la violencia. La Brigada Atadell, respaldada por el CIV, ejecutó detenciones, torturas y más de mil asesinatos, y sirvió de modelo represivo durante la guerra.

Ruíz, quién domina el catalán, analiza el comportamiento de Lluís Companys y el aparato represivo catalán durante la guerra. Lejos de centrarse en la persecución religiosa, como hacen otros autores, estudia cómo Companys permitió la entrada de comunistas en la Comisaría General de Orden Público y facilitó la colaboración con el NKVD. El Grupo de Investigación de dicha Comisaría operó bajo la dirección de Naum Eitingon, con el aval de Madrid. Así, la URSS podía reprimir a los disidentes dentro del propio Estado republicano.

La Generalitat también creó el Servicio Secreto de Inteligencia (SSI), notorio por su persecución de izquierdistas no estalinistas. Su agente más

sinistro fue Alfonso Laurencic, vinculado al SIM y al DEDIDE, quien introdujo métodos de “tortura psicotécnica” en las checas barcelonesas. Allí se torturó a cientos de civiles de manera psicotécnica y física sin juicio previo. Laurencic, protegido por el Frente Popular, fue fusilado en 1939 por el régimen franquista.

Ruíz sostiene que la tortura no solo fue sistemática, sino que se practicó en antiguos monasterios cristianos, lo que añadía una dimensión simbólica a la represión. En Valencia, el convento de Santa Úrsula fue convertido en cárcel por el SIM, donde se torturó a supuestos trotskistas y colaboradores del bando nacional. Aunque podría atribuirse al azar logístico de la guerra, Ruíz argumenta que también hubo una intención de humillar al catolicismo, en línea con la hostilidad republicana hacia las instituciones cristianas desde 1931.

Asimismo, demuestra que numerosos monasterios se destruyeron sin necesidad militar. En Sevilla, pese a su breve control republicano antes de la entrada de Queipo de Llano, se demolieron quince edificios religiosos con apoyo estatal. Ruíz cita un memorándum de Álvarez del Vayo que justificaba estas acciones al considerar las iglesias “nidos de ametralladoras fascistas”, mientras que Georges Soria afirmaba que “en todas las iglesias quemadas, había fascistas”. Para Ruíz, estas acciones revelan una violencia deliberada contra el catolicismo y católicos en vez de utilizar dichos edificios sólo para objetivos militares.

Ruíz demuestra que el SIM cometió asesinatos extrajudiciales incluso cuando el aparato judicial ya favorecía al Frente Popular. A partir de su investigación por los archivos, documenta una masacre ignorada por los historiadores: la noche del 4 al 5 de abril de 1938, veinte presos fueron fusilados y enterrados en la playa tras ser extraídos de un barco en Barcelona. El director del SIM, Manuel Urribarri, reconoció el crimen como represalia por bombardeos franquistas, aunque la orden partió de Manuel López, jefe del Preventorio B. Ni Negrín ni Companys promovieron investigación alguna.

También muestra que varios detenidos murieron por torturas. En el convento de la calle Zaragoza en Barcelona, Alfonso Soler y José Ramoneda, dirigentes falangistas de Sabadell, fallecieron en diciembre de 1938 tras ser golpeados. Otro caso similar ocurrió en Almería con Remedios González Amezcua. Aunque no hubo una política sistemática de ejecutar prisioneros, el SIM no distinguió entre conspiradores y civiles comunes, y los criterios de detención y castigo fueron arbitrarios.

La humillación sistemática de los presos fue otra táctica común del SIM. En la prisión de San Lorenzo (Madrid), los detenidos eran obligados a permanecer desnudos e inmóviles bajo amenaza de golpizas. En cárceles de Valencia, bastaba una falta menor para ser desnudado o golpeado. En el Preventorio nº 1, se imponía el castigo de sostener una moneda

contra la pared bajo amenaza de agresión. El modelo de tortura de Santa Úrsula, donde el 90 % de los presos regresaban herido tras los interrogatorios, se replicó en otros centros, lo cual sirve como evidencia de que estas prácticas no eran aislados, sino una parte integral de la política estatal.

Ruíz califica el trabajo forzado republicano como “un gulag a la española”, inspirado en los modelos soviéticos como el Canal del Mar Blanco. Aunque la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 ya preveía trabajos forzados, fue a partir de 1936 cuando se institucionalizaron como castigo político. Bajo Negrín y con la financiación del SIM, se empleó a presos en obras como un canal en Teruel y un ferrocarril entre Torrejón de Ardoz y Tarancon. Cataluña, bajo Companys y con respaldo del gobierno central, gestionó al menos seis campos de trabajo, donde se internaron más de 3.000 civiles desde Teruel y 1.754 presos de la Cárcel Modelo de Barcelona. El campo nº 3 destacó por su brutalidad: un médico fue asesinado por negarse a encubrir otro homicidio, y veinte reclusos fueron ejecutados por fingir la enfermedad. En 1940, las autoridades franquistas hallaron allí los restos de noventa víctimas. En Concabella, tres presos fueron fusilados tras la fuga de dos compañeros, y se impuso trabajo forzoso incluso a enfermos graves, lo que causó varias muertes adicionales. Según Ruíz, “a los fascistas y a los antifascistas se les trató igual de mal.”

Además de su rigor documental, *La guerra sucia* destaca por la impar-

cialidad de Julius Ruiz, quien reconoce tanto la existencia de redes falangistas en la zona republicana como la ruptura sistemática del Estado de derecho por parte del Frente Popular antes y después del 18 de julio de 1936.

Frente a la tesis de Preston, Graham o Viñas la cual atribuyen la violencia republicana al caos tras el alzamiento, Ruíz demuestra que hubo una represión organizada desde el aparato estatal, coordinada por los gobiernos de Giral, Largo Caballero y Negrín, y replicada también en Cataluña bajo Companys. Su análisis del SIM, del DEDIDE, de los campos de

trabajo y del uso deliberado de la tortura revela una política represiva institucionalizada en el propio gobierno del Estado.

Basado en archivos oficiales, memorias e informes de periódicos, *La guerra sucia* redefine nuestra comprensión del conflicto y expone la dimensión totalitaria que adquirió el Frente Popular. Es una obra fundamental para entender el papel del Estado en la violencia republicana y una de las épocas más oscuras y complicadas de la historia española.

VISHNU RAGHAVAN

ANDRÉS MARTÍN, Ramón de, **Los diplomáticos franquistas ante la realidad política mexicana en el periodo 1940-1970**, Madrid: Dykinson, 2025, 205 p., ISBN: 9791370066079.

La obra *Los diplomáticos franquistas ante la realidad política mexicana en el periodo 1940-1970* constituye una aportación historiográfica de notable valor para el estudio de las relaciones entre España y México en el contexto del franquismo y de la política hispanoamericana de la Guerra Fría. El trabajo se inserta con claridad en la tradición de la historia política y diplomática, pero al mismo tiempo logra trascender el marco estrictamente institucional para adentrarse en la construcción de percepciones ideológicas, culturales y estratégicas entre ambos países. La investigación se distingue por su ambición interpretativa, su riqueza documental y su voluntad de recuperar una mirada concreta: la de los representantes

oficiosos franquistas ante la compleja realidad política mexicana de mediados del siglo XX.

Desde el inicio, el autor plantea un objetivo claro: analizar la percepción que tuvieron los diplomáticos y agentes franquistas sobre la evolución política mexicana durante los sexenios comprendidos entre Manuel Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz (1940-1970), utilizando tanto bibliografía especializada como informes procedentes de archivos oficiales españoles.

Esta propuesta metodológica resulta particularmente relevante porque desplaza el foco desde la narrativa tradicional de las relaciones bilaterales hacia el estudio de las representaciones, interpretaciones y juicios